



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Incidente de regulación de honorarios
INCIDENTISTA	Alfredo Alzate Ramírez
INCIDENTADO	Héctor de Jesús Trespalcios Chica
RADICADO	05001 31 03 008 2017 00585 01
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte incidentada, en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 25 de febrero de 2022, el Juzgado 001 de Ejecución Civil del Circuito de Medellín, accedió a la regulación de honorarios solicitada por Alfredo Alzate Ramírez, frente a Héctor de Jesús Trespalcios Chica, por lo cual ordenó que este debía pagar al peticionario, \$17 437 706, por concepto de honorarios del proceso y fijó en \$500 000 las agencias en derecho del incidente.

Como sustento de lo anterior, el juez de primer nivel tuvo en consideración que de conformidad con el inciso 2 del artículo 76 del C.G.P. el monto de la regulación tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en esa codificación para la fijación de agencias en derecho; no obstante, el incidentista y la parte incidentada no allegaron al proceso contrato de prestación de servicios. Así las cosas, para efectos de la fijación de honorarios debía tenerse en cuenta el conjunto de actuaciones obrantes en el plenario, la cuantía de las pretensiones, así como la duración y eficacia de la labor del abogado. En este sentido, determinó que a la fecha en que el señor Alzate Ramírez dejó de actuar, esto es, desde el 4 de junio de 2021, la obligación ejecutada arrojaba el saldo de \$358 220 637,35 y a la fecha de revocatoria del poder el saldo era de \$348 754 120,34. Sumado a ello señaló que el profesional del derecho llevó el proceso hasta cuando se dictó la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución,

allegó liquidación del crédito, solicitó el decreto y práctica de medidas cautelares, presentó petición de remate y actuó en la resoluciones de las reposiciones propuestas por el demandado. Por otro lado, tuvo en cuenta lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 el cual en el literal c del numeral 4 del artículo 5 en tanto dispone que, en los procesos de mayor cuantía, las agencias en derecho se fijarán entre el 3% y el 7.5%, razones por las cuales, el despacho fijó como el equivalente al 5% de dicho monto honorarios, lo que en pesos se tradujo a la suma de \$17 437 706°°.

Finalmente, en relación con los argumentos expuestos por la parte incidentada, quien aceptó las actuaciones llevadas a cabo por el demandante, y en cuanto a los motivos que condujeron a la revocatoria del poder, definió que esos eran hechos ajenos al proceso sin vocación de impedir la fijación de honorarios.

1.2. Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de Héctor de Jesús Trespalacios Chica presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, para que el valor establecido como honorarios fuera corregido y en consecuencia se fijara un valor del 5%, pero sobre el valor del crédito hipotecario.

Con ese propósito, indicó que analizado el literal c del numeral 4 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 se entiende que la tarifa de agencias en derecho oscila entre el 3% y el 7.5\$, pero ese monto se debe tomar sobre el capital y no sobre la suma del capital más los intereses. Por otro lado, expuso que no pretendía que el despacho se abstuviera de fijar los honorarios requeridos, pero no podía pasarse por alto que el incidentista representaba a la parte incidentada en más de 8 procesos simultáneamente al momento en que fueran revocados los poderes, esto es, junio de 2021, que además era el abogado de confianza, que tenía facultades para negociar, recibir y entregar dineros; pero que, no podía abusar de la profesión y de la confianza depositada, para defraudar económicamente a su mandatario, pues se apropió de \$356 000 000. Anotó que no era dable dejar de lado el análisis de esa práctica abusiva solo porque no se trataba de hechos del proceso, pues ello debió haber llamado la atención del despacho y ser tenido en cuenta para la fijación de los honorarios.

De otra parte, sostuvo que en el proceso no hubo fijación de agencias en derecho, dado que, el demandado contaba con amparo de pobreza, pero si este no hubiese sido el caso, la pregunta sería ¿cuál hubiese sido el valor de las

agencias en derecho?, las mismas se fijan en la sentencia, se hubieran fijado con base en el capital pedido en las pretensiones, o ¿se fijarían con base en la totalidad de la liquidación del crédito?, y la respuesta sería con base en el capital. Apuntó que tampoco podía olvidarse los criterios para la fijación de honorarios tales como, la naturaleza, calidad y duración de la gestión, y es precisamente en ese punto en que no se podía desligar las acciones ejecutadas por el señor Alzate Ramírez, en los procesos encomendados a él, puesto que se trataba de las mismas partes y de la misma gestión (recuperación del dinero garantizado en hipoteca).

1.3. Del recurso incoado se corrió traslado al incidentista, quien refirió que los argumentos planteados eran “irrespetuosos e inescrupulosos”, como quiera que la recurrente desconocía la relación contractual con el señor Trespalacios Chica. También precisó que, en virtud del Acuerdo PSAA16-10554, si se dicta sentencia en que se ordene seguir adelante con la ejecución, las agencias en derecho debían ser fijadas entre el 3% y el 7.5% de la suma determinada, y si se dictaba sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado, debía ser fijado entre el 3% y el 7.5% del valor total que se ordenó pagar en el mandamiento de pago. Conforme con esto, adujo que la fijación de honorarios se tiene en relación con el valor del crédito que se ordenó pagar o por el cual se ordenó continuar con la ejecución que corresponde a capital más intereses.

1.4. En proveído de 1 de agosto de 2023, el Juzgado 001 de Ejecución Civil del Circuito de Medellín resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable, por lo cual, mantuvo incólume la decisión y concedió la alzada. Como cimiento de ello el juez determinó que el inciso 1 del literal c del numeral 4 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 establece que si se dicta sentencia en que se ordene seguir adelante con la ejecución, las tarifas de agencias en derecho serán entre el 3% y el 7.5% de la suma determinada. En este sentido, definió que en el presente proceso se profirió auto que ordenó seguir adelante con la ejecución de la forma en que fue ordenada en el auto que libró mandamiento de pago, es decir, por la suma de \$157 934 000 más los intereses de mora, y según la liquidación de crédito efectuada por el despacho, esta arrojó como resultado que a la fecha de revocatoria el valor era de \$190 820 120 para un total liquidado de \$348 754 120,34, de manera que el 5% de dicho valor equivale a \$17 437 706, pues para tal fijación debía tenerse en cuenta el capital y los intereses liquidados.

## CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 76 del Código General del Proceso dispone lo concerniente a la terminación del poder y la posibilidad que tiene el profesional del derecho de solicitar que se regulen los honorarios. Al respecto, la norma en cita señala:

*"ARTÍCULO 76. TERMINACIÓN DEL PODER. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso.*

*El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral.*

*Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado fallecido.*

*La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido.*

*La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores.*

*Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda.”.*

2.2. Por su parte, el artículo 129 del estatuto procesal establece cuál es el trámite de los incidentes.

*"ARTÍCULO 129. PROPOSICIÓN, TRÁMITE Y EFECTO DE LOS INCIDENTES. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer.*

*Las partes solo podrán promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente promovido por una parte se correrá traslado a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretarán y practicarán las pruebas necesarias.*

*En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correrá traslado por tres (3) días, vencidos los cuales el juez convocará a audiencia mediante auto en el que decretará las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes.*

*Los incidentes no suspenden el curso del proceso y serán resueltos en la sentencia, salvo disposición legal en contrario.*

*Cuando el incidente no guarde relación con el objeto de la audiencia en que se promueva, se tramitará por fuera de ella en la forma señalada en el inciso tercero."*

2.3. Frente a la regulación de honorarios, la Corte Suprema de Justicia en Auto AC4063 de 2019 definió cuáles eran las directrices que debía tenerse en cuenta para este trámite incidental.

*"A partir de lo que disponía el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil en torno al finiquito del poder, que básicamente es similar a la regulación actual, la Sala ha expresado que la figura del incidente de regulación de honorarios está sometido a las siguientes directrices:*

*a) Presupone revocación del poder otorgado al apoderado principal o sustituto, ya expresa, esto es, en forma directa e inequívoca, ora por conducta concluyente con la designación de otro para el mismo asunto.*

*b) Es competente el juez del proceso en curso, o aquél ante quien se adelante alguna actuación posterior a su terminación, siempre que se encuentre dentro de la órbita de su competencia, la haya asumido, conozca y esté conociendo de la misma.*

*c) Está legitimado en la causa para promover la regulación, el apoderado principal o sustituto, cuyo mandato se revocó.*

*d) Es menester proponer incidente mediante escrito motivado dentro del término perentorio e improrrogable de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del auto que admite la revocación. Ésta, asimismo se produce con la designación de otro apoderado, en cuyo caso, el plazo corre con la notificación de la providencia que lo reconoce.*

*e) El incidente es autónomo al proceso o actuación posterior, se tramita con independencia, no la afecta ni depende de ésta, y para su decisión se considera la gestión profesional realizada hasta el instante de la notificación de la providencia admitiendo la revocación del poder.*

*f) La regulación de honorarios, en estrictez, atañe a la actuación profesional del apoderado a quien se revocó el poder, desde el inicio de su gestión hasta el instante de la notificación del auto admitiendo la revocación, y sólo concierne al proceso, asunto o trámite de que se trate, sin extenderse a otro u otros diferentes (...).*

*g) El quantum de la regulación, "no podrá exceder el valor de los honorarios pactados", esto es, el fallador al regular su monto definitivo, no podrá superar el valor máximo acordado» (CSJ AC, 31 may. 2010, Rad. 4269, reiterado el 2 nov. 2012, Rad. 2010-00346-00).".*

2.4. Por otra parte, el Acuerdo PSAA16-10554 determina el valor de los honorarios para los procesos ejecutivos.

*"ARTÍCULO 3º. Clases de límites. Cuando las agencias en derecho correspondan a procesos en los que se formularon pretensiones de índole pecuniario, o en los que en la determinación de la competencia se tuvo en cuenta la cuantía, las tarifas se establecen en porcentajes sobre el valor*

*de aquellas o de ésta. Cuando la demanda no contenga pretensiones de dicha índole, o cuando se trate de la segunda instancia, de recursos, o de incidentes y de asuntos asimilables a los mismos, las tarifas se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, en delante S.M.M.L.V.*

...

*ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:*

...

*4. PROCESOS EJECUTIVOS. En única y primera instancia - Obligaciones de dar sumas de dinero; o de dar especies muebles o bienes de género distintos al dinero, de hacer, o de no hacer, que además contengan pretensiones de índole dinerario.*

...

*c. De mayor cuantía. Si se dicta sentencia ordenando seguir adelante la ejecución, entre el 3% y el 7.5% de la suma determinada, sin perjuicio de lo señalado en el parágrafo quinto del artículo tercero de este acuerdo.*

...”.

#### CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si la decisión proferida por el juez de primer grado en cuanto al valor de los honorarios otorgado en favor del incidentista es correcta, pues en sentir del recurrente el valor no se acompasa con los criterios determinados en el ordenamiento jurídico para tal fin.

Dicho lo anterior, esta dependencia judicial considera que lo resuelto por el fallador de primera instancia se encuentra ajustado a derecho, pues de conformidad con las normas procesales citadas con anterioridad, la regulación de honorarios concedida en favor del incidentista obedece a la gestión profesional por él desplegada, ello de acuerdo con los límites establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y en virtud de la suma determinada en el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución.

Al respecto se tiene que, el 24 de octubre de 2017 Héctor de Jesús Trespalacios Chica confirió poder especial, amplio y suficiente al abogado Alfredo Alzate

Ramírez con el fin de que radicara demanda ejecutiva frente a José Alfredo Martínez López. Inicialmente el libelo fue radicado y el conocimiento de este correspondió al Juzgado 008 Civil del Circuito de Medellín, quien en providencia de 7 de noviembre de 2017 inadmitió la demanda para que aclarara el literal a de la pretensión primera, por cuanto se indicó un valor en número y otro en letras. Subsanada la demanda, en auto de 11 de diciembre del mismo año, el despacho en mención libró mandamiento de pago por \$157 934 000 por concepto de capital más los intereses de mora, los cuales se tasarían conforme el máximo autorizado desde el 27 de mayo de 2017. El abogado de la parte demandante pidió adición del auto en el sentido de librar mandamiento de pago por la suma indicada en el literal c de las pretensiones. En proveído de 8 de febrero de 2018 el juzgado en cita adicionó el auto que libró mandamiento de pago y ordenó el pago de los intereses por la suma de \$27 013 000 por concepto de intereses causados y debidos por el demandado hasta el 16 de febrero de 2016. El extremo procesal demandado fue notificado por conducta concluyente desde el 8 de febrero de 2018 y en el término legal, no formuló ningún medio exceptivo.

Debido a lo anterior, el Juzgado 008 Civil del Circuito de Medellín en auto de 22 de enero de 2019 ordenó seguir adelante con la ejecución en la forma ordenada en providencias de 11 de diciembre de 2017 y 8 de febrero de 2018. Posteriormente, el incidentista presentó diversas liquidaciones del crédito actualizadas y se pronunció sobre los recursos de reposición planteados por la parte demandada. Una vez el expediente fue remitido a los juzgados de ejecución civiles del circuito de Medellín, este fue conocido por el Juzgado 001 de esa especialidad, quien en auto de 19 de octubre de 2021 aprobó la liquidación del crédito en \$358 220 637,35 y a la fecha en que el poder fue revocado, el saldo era de \$348 754 120,34. Es de advertir que durante el trámite el profesional del derecho también gestionó lo necesario para materializar las medidas cautelares decretadas y solicitó el remate del bien embargado.

En este sentido, el *a quo* tuvo razón al definir el valor de los honorarios requeridos por el señor Alzate Ramírez, en tanto, conforme a la gestión desplegada por él se observa que inició el proceso y lo llevó hasta que se ordenó seguir adelante con la ejecución, además presentó las liquidaciones del crédito respectivas y actuó con diligencia para la práctica de las medidas cautelares decretadas, de igual modo, solicitó el remate del bien embargado. Así mismo,



se observa que al presente trámite incidental no se aportó contrato de prestación de servicios celebrado entre los interesados, por lo que la fijación de honorarios debía atender a lo dispuesto en el literal c del numeral 4 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554, el cual prevé que en los procesos ejecutivos de mayor cuantía en que se haya dictado sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, las agencias en derecho se fijarán entre el 3% y el 7.5% de la suma determinada.

En el presente caso esa suma determinada es el valor de la deuda liquidada, que al momento en que el poder fue revocado, ascendía a un valor de \$348 754 120 34 así que el despacho de primer nivel fijó los honorarios en el 5% del valor de la referencia, decisión razonable en atención a la gestión desplegada por el ahora incidentista. Por lo tanto, los honorarios equivalen a \$17 437 706°°.

Finalmente, es de indicar que los argumentos planteados por la parte recurrente tendientes a afirmar que el incidentista incurrió en un presunto abuso de confianza, es un tema que el interesado está facultado para plantear ante las autoridades competentes, pues es este el escenario para debatir tales circunstancias, que no tienen la virtualidad de impedir la fijación y valoración por concepto de honorarios profesionales.

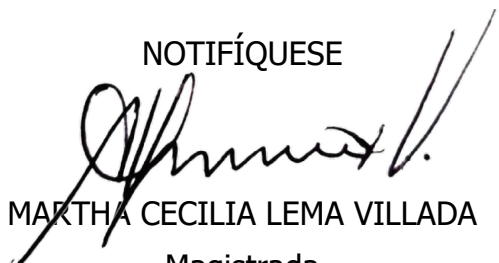
En consecuencia, la providencia de 25 de febrero de 2022 proferida por el Juzgado 001 de Ejecución Civil del Circuito de Medellín, será confirmada.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 25 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado 001 de Ejecución Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Se condena en costas a la parte recurrente y como agencias en derecho se fija la suma de 1 SMLMV.

NOTIFÍQUESE



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA  
Magistrada